



Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general
31 de diciembre de 2015
Español
Original: francés
Español, francés e inglés únicamente

Comité de Derechos Humanos

Observaciones finales sobre el informe inicial de Djibouti

Adición

Información recibida de Djibouti sobre el seguimiento de las observaciones finales*

[Fecha de recepción: 8 de noviembre de 2015]

Párrafo 10

1. La violencia doméstica no está sujeta a un régimen jurídico específico, pues está equiparada al resto de las formas de violencia, que en el derecho penal están castigadas con penas severas. Sin embargo, debido al carácter “invisible, por no decir tabú”, de la violencia doméstica, el Estado parte presta una especial atención a la cuestión. Así, ha llevado y sigue llevando a cabo numerosas actuaciones para reducir e incluso eliminar en la medida de lo posible esta grave vulneración de los derechos de la mujer. El Estado parte ante todo ha primado el aspecto preventivo y, por este motivo, ha organizado numerosas campañas de concienciación en distintos medios y canales de comunicación (entre ellos, programas de radio y televisión, reuniones de reflexión y anuncios publicitarios y carteles).

2. El mensaje transmitido por las diversas campañas es simple y claro: “el silencio es culpable”. El objetivo era ante todo combatir el tabú que rodea la cuestión, pues solo puede procederse a enjuiciar los actos de violencia cuando se denuncian y se ponen en conocimiento de todos.

3. A fin de ayudar a las víctimas de la violencia doméstica, el Gobierno y la sociedad civil crearon en 2007, en el seno de la organización no gubernamental más antigua y más grande del país, la Unión Nacional de Mujeres de Djibouti (UNFD), una célula de atención, información y orientación para mujeres y niñas víctimas de la violencia. Al frente de esta célula se encuentra un grupo de profesionales que, cada uno en su especialidad, prestan apoyo psicológico, médico y, sobre todo, jurídico.

4. Las mujeres demandan cada vez más los servicios de la célula porque conocen mejor sus derechos a raíz de las distintas campañas de concienciación. Por ejemplo, en el año 2013, la célula registró 256 asuntos relacionados con casos de violencia conyugal, violación, abusos sexuales, impago de la pensión alimenticia, violencia

* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.



psíquica y agresión verbal. La gran mayoría de esos casos fueron denunciados ante los órganos jurisdiccionales.

5. Asimismo, podemos informar al Comité de Derechos Humanos que el Estado parte preparó una guía para hacer frente a la violencia de género; esta guía es un instrumento jurídico, de información y orientación, no solo para las mujeres, sino también para los hombres víctimas de actos de violencia. Se trata de un instrumento pedagógico muy importante y útil para las mujeres, en particular para presentar una denuncia y recurrir al auxilio de la justicia.

6. También con esta perspectiva de proteger a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia de género, el Estado parte preparó y publicó en 2011 una guía sobre la violencia sexual. Esta guía es un instrumento útil de divulgación, prevención y protección de los derechos de las personas vulnerables y las víctimas de actos de violencia sexual, y da respuesta a las preguntas más frecuentes. La guía describe las conductas que cabe mantener, así como las diversas etapas del proceso judicial.

7. Las numerosas actividades están comenzando a dar sus frutos y son cada vez más numerosas las mujeres que se atreven a defender sus derechos ante los tribunales.

8. A fin de consolidar los logros en materia de lucha contra la violencia de género, el Gobierno prevé adoptar las medidas siguientes:

- Presentar en el próximo período de sesiones del Parlamento, en octubre de 2015, un proyecto de ley sobre medidas penales contra la violencia doméstica en todas sus formas;
- Fortalecer la política de lucha contra la violencia ya aplicada por el Gobierno, incidiendo más en las actividades de concienciación;
- Impartir formación a las distintas autoridades (policías, gendarmes y magistrados, entre otros) encargadas de la aplicación del marco legislativo vigente;
- Implantar programas de atención jurídica, social y psicológica para las víctimas de la violencia.

Párrafo 11

9. El Estado parte vuelve a rechazar enérgicamente las denuncias de tortura y malos tratos que se formulan injustamente en su contra. La prueba es que los lugares de detención están abiertos a todos los interesados que trabajan con nosotros en los distintos programas para la promoción y protección de los derechos humanos.

10. Así, el Estado parte invita periódicamente a los asociados multilaterales (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Comité Internacional de la Cruz Roja y sistema de las Naciones Unidas) y los asociados bilaterales, como los Estados Unidos de América, a que efectúen visitas a los lugares de detención con total independencia y transparencia.

11. La visita más reciente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tuvo lugar del 25 de mayo al 1 de junio de 2015. La Comisión formuló una serie de observaciones que contradecían las acusaciones de tortura y violencia en los lugares de detención (véase el informe adjunto).

12. La Comisión Africana, al resolver sobre casos de tortura, se pronunció en favor del Estado parte y desestimó las falsas acusaciones formuladas por la parte contraria, a saber, el Sr. Assad.

13. En el plano nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) efectúa visitas anuales a la prisión principal de Gabode y a las comisarías de policía y brigadas de la Gendarmería para preparar un informe que contiene principalmente recomendaciones dirigidas al Gobierno.

14. El fortalecimiento del estatuto de la Comisión mediante la aplicación de la Ley de Creación, Organización y Funcionamiento de la CNDH, de 20 de julio de 2014, le permite, entre otras cosas, realizar las siguientes tareas:

Artículo 11 de la Ley: La Comisión podrá admitir a trámite denuncias e investigaciones relativas a casos de vulneración de derechos humanos; efectuar visitas periódicas, con o sin previo aviso, a todos los lugares de reclusión y formular recomendaciones a las autoridades competentes a fin de mejorar el trato y la situación de las personas privadas de libertad; prevenir la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad con las normas internacionales, regionales o nacionales pertinentes; luchar contra las violaciones y la violencia de género; poner en conocimiento del ministerio público los casos de vulneraciones de derechos humanos; prestar o facilitar asistencia jurídica a las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente a las mujeres, niños y otras personas vulnerables.

15. El Estado parte se compromete a, en el próximo período de sesiones de la Asamblea Nacional, en octubre de 2015, ratificar el Protocolo de Estambul y a incluirlo en los programas de formación y concienciación de las fuerzas del orden en lo tocante a la realización de las investigaciones y otros procedimientos judiciales.

Párrafo 12

16. Después de dos años de desacuerdo con la oposición tras las elecciones legislativas de febrero de 2013, el Gobierno y la oposición firmaron en diciembre de 2014 un acuerdo marco con el objetivo, por una parte, de solucionar las diferencias inmediatas y, por otra, de trabajar juntos para crear un entorno propicio para el funcionamiento de una democracia pacífica y plural.

17. Ambas partes, cada una por su lado, han comenzado a dar cumplimiento a los compromisos que asumieron. La oposición, por ejemplo, se ha reintegrado a la Asamblea Nacional, después de haberse negado a ocupar sus escaños. El Gobierno, por su parte, amnistió a tres parlamentarios de la oposición que habían sido privados de sus derechos cívicos y políticos tras haber sido condenados por un tribunal. Asimismo, el Gobierno ha reintegrado a los agentes del Estado contestatarios que habían sido declarados responsables de hechos con los que pretendían poner trabas al buen funcionamiento de la administración pública.

18. También en el contexto de la aplicación de ese acuerdo marco, ambas partes constituyeron una comisión parlamentaria paritaria encargada de llevar a cabo una serie de reformas con el fin de consolidar los derechos civiles y políticos en el país.

19. Las reformas que se consideran prioritarias son las siguientes:

- La reforma para transformar la actual Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) en una Comisión Electoral Nacional Independiente Paritaria;
- La aprobación del Estatuto de la Oposición Política;
- La reforma de la Ley de Comunicaciones, aprobada en 1992;
- El fortalecimiento de la descentralización;

- La consolidación y el fortalecimiento de los mecanismos nacionales que regulan y garantizan las cuestiones relativas a los derechos humanos y las libertades públicas.
20. Todas estas reformas se materializarán en una serie de textos legislativos que, en principio, se debatirán y eventualmente serán votados por los parlamentarios en el próximo período de sesiones, que, como ya se señaló, se iniciará en octubre de 2015.
21. Por otra parte, la modificación de la Ley de Comunicaciones está en el núcleo de las reformas contempladas por el Gobierno y la oposición. Por consiguiente, todas las disposiciones contrarias a nuestros compromisos internacionales, así como todas las que pudiesen obstaculizar el ejercicio de la libertad de expresión, quedarán derogadas tras la aplicación de las reformas.
22. En cuanto al encarcelamiento de periodistas, volvemos a declarar con firmeza ante el honorable Comité que la República de Djibouti nunca ha encarcelado a periodistas por ejercer su libertad de expresión, que es un derecho tutelado por la Constitución.
23. Por consiguiente, hoy por hoy en nuestro país no hay ni presos políticos ni de conciencia.
24. En cuanto a los activistas enumerados en su recomendación, a saber, los miembros de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los sindicalistas, cabe señalar que disfrutaban de una mayor protección. Al igual que los demás ciudadanos, tienen derecho a defenderse ante los órganos jurisdiccionales si han sido víctimas de acoso o amenazas en el ejercicio de su profesión.
25. En ese sentido, cabe señalar que el Estado parte ya presentó en el Parlamento un proyecto de ley, que está en trámite de aprobación, con miras a la constitución de la Comisión Nacional de la Comunicación. La misión de esta comisión independiente será hacer cumplir la ley en materia de libertad de prensa y derecho a la información.
26. La Comisión velará por la independencia y la libertad de información y se encargará de que la profesión respete su código deontológico.
-